

Neoliberalismo y Tratado de Libre Comercio: ¿hacia ciclos de guerra civil?

John Saxe-Fernández*

A la memoria de Sergio de la Peña

Aclaración teórico-metodológica

Desde el Seminario de Teoría del Desarrollo del IIEC se ha venido realizando una sistemática evaluación de los instrumentos conceptual-explicativos en boga en el análisis e interpretación del marco de referencia internacional y sus relaciones e interrelaciones con la situación nacional.

La actividad ha sido continua, por medio de una programación de talleres semanales y seminarios mensuales en los que han participado especialistas de primer rango en el terreno nacional e internacional. Se realiza así un esfuerzo continuo, encaminado a estimular una reflexión crítica y científicamente fundamentada, sobre temas vinculados con la globalización. Ahora, gracias a esta amable invitación auscultaré algunos de los aspectos vinculados con la gran crisis

que se observa en el sector agropecuario mexicano, en el contexto de las reflexiones teórico-metodológicas realizadas en el seminario, específicamente en las que están implicadas las formas de interrelación entre lo interno y lo externo, en este caso, entre el sector agropecuario y la "globalización".

Al respecto, en el seminario hemos identificado dos perspectivas para analizar el fenómeno: primero, la de la globalización como categoría científica, es decir, como un concepto cuyo referente histórico y empírico está centrado en el largo proceso multisecular de la *internacionalización económica* que se observa en el período posrenacentista, y que adquirió gran fuerza después de la segunda mitad del siglo XIX como resultado de la segunda Revolución Industrial y la multiplicación de grandes unidades empresariales de base nacional que, con los antecedentes de las compañías mercantiles de siglos anteriores, empezaron a operar internacionalmente.

* Profesor de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como coordinador del Seminario Teoría del Desarrollo, "STD" del Instituto de Investigaciones Económicas, IIEC.

La globalización

Como categoría histórica, la globalización es un equivalente de la "internacionalización económica", y por tanto es un fenómeno íntimamente vinculado con el desarrollo capitalista, intrínsecamente expansivo y que tiene en la experiencia colonial e imperial una de sus más claras expresiones históricas y contemporáneas. Si por globalización entendemos la internacionalización económica en sus momentos de apertura relativa, es decir, la existencia de una economía internacional preponderantemente abierta y con grandes y crecientes flujos comerciales y de inversión de capital entre las naciones, entonces no es un fenómeno nuevo, inédito ni irreversible. Es igualmente cierto que estos flujos de bienes, inversiones, producción y tecnología tienden a ajustarse a pautas de especialización y de división internacional del trabajo y también que el peso del comercio y de la inversión se va modificando a favor de esta última, un hecho especialmente notorio a partir de la década de 1980 cuando la inversión extranjera directa (IED) profundiza su papel como eje organizativo de la estrategia capitalista.

Una segunda perspectiva en torno a la globalización es la de la sociología del conocimiento. Desde este ángulo hemos enfocado nuestra atención crítica sobre el "discurso globalista" que se ha instalado como una oferta de moda, eufórica y determinista, acrítica y superficialmente aceptada por grandes públicos empresariales, políticos y académicos. En el Seminario Teoría del Desarrollo nos referimos a esta dimensión como la "versión *pop*" del globalismo¹. En México el globalismo *pop* fue usado en la campaña oficial de promoción populista del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vendido a la población como el instrumento para ingresar, por la puerta grande de Estados Unidos, al Primer Mundo. Un ingrediente importante de este "paradigma", en el que tanto los críticos como los defensores de la inversión extranjera

directa (IED) a menudo coinciden, ha sido la creencia de que se ha gestado un poderoso mercado global que rápidamente está haciendo obsoletas las fronteras nacionales y, además, que las corporaciones multinacionales se han erigido en un actor autónomo en las relaciones económicas internacionales. Este discurso ofrece una interpretación errónea a partir de hechos comprobables como el aumento de los intercambios mundiales, el arribo de nuevas tecnologías y la continua ampliación geográfica e integración vertical de las operaciones internacionales de las corporaciones multinacionales.

Uno de los aspectos de mayor relevancia derivados de las investigaciones realizadas en el STD gira en torno al reconocimiento del fenómeno de la internacionalización económica, es decir, de la globalización entendida como una categoría científica.

Con base en el análisis histórico, se plantea que el presente estadio del capitalismo no muestra rupturas fundamentales con la experiencia del pasado en lo que hace referencia al asimétrico contexto de poder internacional y nacional en el cual ocurren los flujos comerciales, de inversión, las transferencias de tecnología y de esquemas productivos. En el estudio de caso aquí presentado en torno a los traumáticos programas y esquemas aplicados en México y que han llevado a la agricultura mexicana a una de sus más graves crisis desde 1910, queda claro que el proceso no puede explicarse adecuadamente sin tener presente, de manera explícita, que ocurre en un largo torrente histórico y en un caldo de poder de relaciones profundamente leonino en el orden económico-estratégico, conocido en la literatura científica como "imperialismo", signado por la inequidad, el conflicto, la dominación, la apropiación del excedente y las contradicciones inter-estatales, de clase y etnia, de género y de mercados. Históricamente la internacionalización económica en México y América Latina se concreta en el comercio exterior y en los flujos de inversiones extranjeras y ha sido por la vía de estos dos pivotes como se han incorporado a nuestra dinámica las imágenes, valores, ideas, costumbres, instituciones, bienes, pautas y aspiraciones de consumo, que influyen en la economía, la organización social, la política y la cultura, y refuerzan continuamente la estructura y la dinámica de la subordinación a los ordenamientos internacionales de los países capitalistas avanzados².

1. Algunos autores utilizan la frase "versión dura" del globalismo para referirse a lo mismo, por tratarse de una visión extremista y bastante superficial de estos fenómenos. Esta categorización es usada, por ejemplo, en el esclarecedor trabajo de Paul Hirst y Grahame Thompson, *Globalization in Question*, Londres, Polity Press, 1996. Pero como la adjetivación ("dura") también se usa para connotar solidez científica -por ejemplo en el contraste entre las ciencias "duras" y las humanidades, prefiero la sugerencia de Paul Krugman en materia de títulos, (Paul Krugman, *Pop Internationalism*, Cambridge, Mass. MIT Press, 1996). Utilizo la palabra «*pop*» por tener una connotación más precisa y fiel del asunto.

2. En torno a este tema, consultense Marcos Kaplan, *Formación del Estado nacional en América Latina*, Buenos Aires, Amorrortu, 1969; Alonso Aguilar M., *Teoría leninista del imperialismo*, México, Editorial Nuestro Tiempo, 1978.

En México la expresión oligárquica clásica de este tipo de modernización capitalista, el "porfiriato", también se centra en la formación de un Estado oligárquico que fue hegemonizado por sectores nacionales y extranjeros unificados por un interés común en la vigencia de una política librecambista y en una coparticipación en la apropiación del excedente. En el porfiriato se instala "la neutralidad malevolente del Estado" ya que por medio de la inversión extranjera y el comercio exterior se profundiza la descapitalización, el drenaje hacia afuera de lo más cuantioso del excedente generado internamente, mientras la oligarquía porfiriana desperdicia su tajada del pastel canalizando sus actividades hacia la usura, la intermediación, la especulación y el consumo suntuario. Leopoldo Zea sintetiza puntualmente el fenómeno así:

Una pequeña pero poderosa oligarquía se había formado alrededor del presidente, quien les había otorgado el derecho de enriquecerse. Este pequeño grupo poseía toda la riqueza del país; sus miembros daban preferencia a sus amigos en la distribución de la propiedad. Cliqués surgidas a la sombra de los bancos... monopolizaban todas las ganancias y hacían que el progreso social fuera otra leyenda nada más. Ciegos ante los problemas de su país, esas gentes sólo se preocupaban de sus propias ganancias³.

Esta bien lograda síntesis conceptual usada para describir al gobierno de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX, fácilmente puede aplicarse a las tendencias y eventos que han venido cimbrando a la sociedad mexicana de finales del siglo XX, con la aplicación del neoliberalismo que socava las bases sociales y políticas del PRI.

Paralelo entre la situación mexicana del siglo pasado con la actual

La regresión económica y social se instala bajo el neoliberalismo con el rótulo "reformas de mercado". El hecho central es que con la irrupción en la historia nacional del "neoporfirismo" y de la formalización de una relación subordinada con Estados Unidos por medio del TLC, una suerte de "neomonroísmo", rompe el pacto del nacionalismo revolucionario y en ningún área con mayor fuerza que en el sector rural, como se ha manifestado la rebelión zapatista en Chiapas y otras expresiones político-militares de insurrección popular en Oaxaca y Guerrero. "El pacto del nacionalismo revolucionario", escribió Sergio de la Peña:



...fue roto y despojado de contenido por las políticas neoliberales desde mediados de los 80, al cancelar compromisos y formas de solución de agravios que regularon la vida nacional por décadas, sin crear nada que lo sustituyese ni darle vida plena al sistema legal. Pero persisten rasgos del pacto anterior, como la concentración del poder, los abusos impunes, el arreglo personal más que institucional, la intermediación ideológica y la manipulación social ... El relajamiento del viejo orden abrió paso a las luchas abiertas entre fracciones de la clase dominante⁴.

En el porfiriato el aperturismo a la inversión y el comercio incluye un proceso de "integración" y de re-

3. Leopoldo Zea, *El positivismo en México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1944.

4. Sergio de la Peña, "Se rompió el pacto del nacionalismo revolucionario", Excelsior, p. 27A.

estructuración que se implementa a través de un tipo de comercio exterior centrado en el intercambio de materias primas agromineras por manufacturas y aportes de capital, en tanto las exportaciones mexicanas, realizadas con creciente participación de inversionistas y empresas estadounidenses, se concentran en algunos productos requeridos por Estados Unidos en su proceso de consolidación económica y a finales del siglo XIX.

Hoy las exportaciones se centran en materias primas de carácter estratégico como el petróleo y ciertos minerales, pero también en la explotación de mano de obra barata por medio del esquema de industrialización de la maquila.

Los productos agrícolas y especialmente la producción nacional de granos para el consumo nacional, como antaño, se ven gravemente afectados por el esquema. Es importante recordar que a finales del siglo XIX el país vivió algo similar, ya que la modernización capitalista bajo el librecambio ocasionó una profunda desestabilización del país.

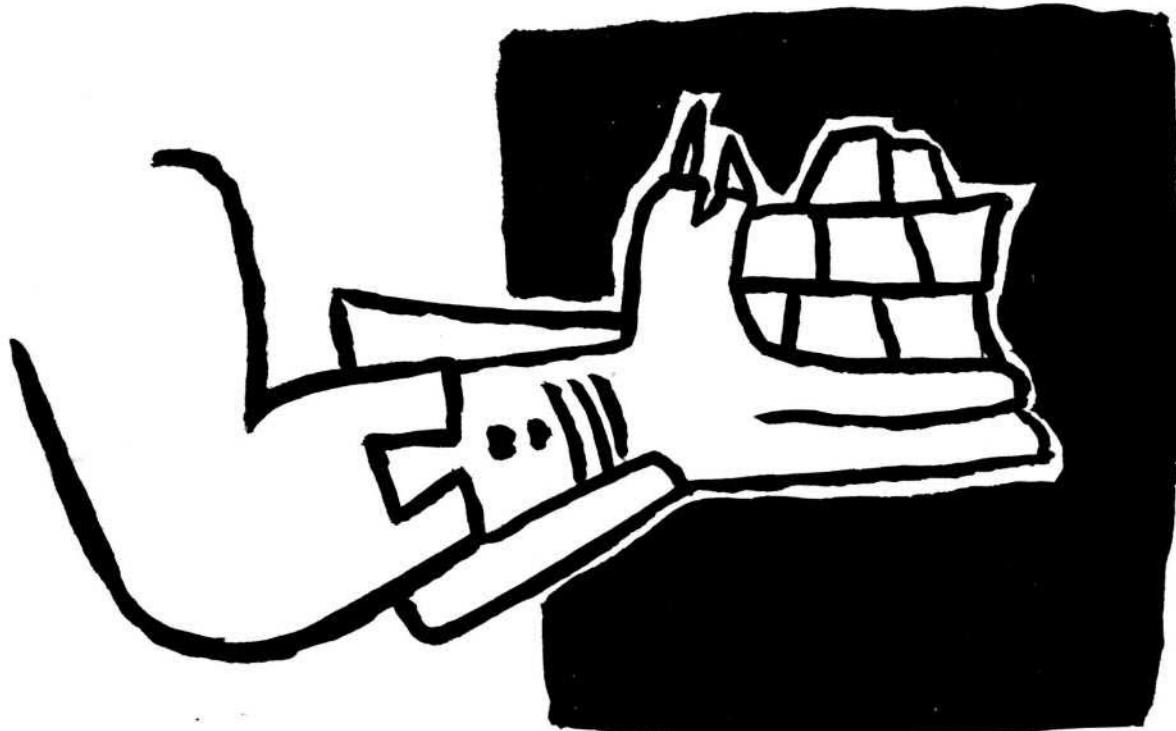
En cuanto a la apertura a la inversión, tanto la porfirista como la actual, acciona de manera convergente con la apertura comercial y el financiamiento, es decir, se realiza en función de las necesidades metropolitanas de materias primas, minerales, combustibles y en la producción abaratada por la mano de obra mexicana y las exenciones arancelarias de maquilas que ofrecen a grandes empresas que van desde la automovilística y electrónica hasta los *agribusiness* (productos superbaratos para ser realizados en el mercado nacional estadounidense), por empresas multinacionales estadounidenses, europeas y asiáticas, con sorprendentes márgenes de ganancia. El rompimiento del pacto del nacionalismo revolucionario conlleva a la apertura indiscriminada al comercio y a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el petróleo, la electricidad, los ferrocarriles, los puertos, aeropuertos y otras actividades lucrativas.

El tratado de libre comercio

Tanto en los tiempos del TLC como durante el librecambio del siglo XIX y principios del XX, en México y en América Latina, las ganancias derivadas del crecimiento hacia afuera contribuyen a fortalecer la demanda de exportaciones, en el período anterior centradas en maquinarias, equipos, repuestos, bienes intermedios, de consumo y servicios, a los que hoy se agregan, por medio de la maquila, todo tipo de insumos electróni-

cos, automovilísticos, eléctricos, farmacéuticos, etc. En 1860 el comercio bilateral México-Estados Unidos llegaba a 7 millones de dólares y ya en 1900 la apertura porfirista lo había cuadruplicado llegando a 64 millones⁵. Tales resultados, como ocurre hoy, se manifestaron en el desarrollo y enriquecimiento de un sector minoritario de la economía y de la población mexicana. En el terreno de las inversiones el cuadro fue más espectacular, habiéndose registrado una virtual "compra" del aparato productivo mexicano por parte de los inversionistas extranjeros, preponderantemente estadounidenses. Ya en 1910, en momentos en que el país empezaba a estallar, los ciudadanos estadounidenses ejercían derechos de propiedad sobre el 43% de todas las propiedades del país, es decir, más que sus contrapartes mexicanas, de tal suerte que la gran liquidez observada en el sistema internacional del período posterior a 1880 que se traduce en enormes flujos de capital, está directamente vinculada con el inicio de la lucha revolucionaria. En 1902 la inversión extranjera que ingresó al país alcanzó cifras en ese momento astronómicas, dedicadas a las concesiones petroleras, de plata y otros minerales, así como a la compra de grandes plantaciones para la exportación. Entre 1903 y 1910 la inversión extranjera triplica las cantidades registradas entre 1876 y 1900 y el control estadounidense era abrumador en ciertos renglones, como la producción cauchera, los automóviles y el petróleo. Y mientras la agricultura se orientó a las exportaciones (azucareras, de cáñamo, etc.), empezaron a proliferar grandes masas de campesinos desposeídos, mientras se colapsó la producción nacional de alimentos y granos para consumo interno. El esquema librecambista desgarró de manera sistemática y profunda el tejido social creando una profunda desestabilización económica y política que finalmente se militarizó. Por ejemplo, en 1867 México producía más granos para consumo interno que en 1910, pero en la primera década del siglo XX estaba más "modernizado", con cierta industria incipiente, ferrocarriles y con un gran sector exportador, cuya estructura es ampliada, como hoy, ya que sus utilidades se usan para incrementar la capacidad de importación y de pagos externos del país⁶. Las invasiones de tierra campesina por parte de los capitalistas locales y extranjeros, toleradas e impulsadas por el régimen porfiriano aumentaron de manera paralela al arribo de más inversión extranjera;

5. Consultese Walter LaFeber, *In Search of Opportunity*, Nueva York, Cambridge University Press, 1995, pp. 68-72.
6. Algo similar ocurre en la región latinoamericana. Consultese Kagan, "Incorporación y reestructuración", op. cit., pp. 143-158.



simultáneamente se dio un crecimiento poblacional del campesinado y el surgimiento de una clase media informada y educada. A lo largo del período posterior a la Guerra Civil, Estados Unidos se transformó en una potencia económica impactada por dos fuerzas simultáneas: la centrifugación capitalista como la observada en México y otras naciones, una expansión del comercio y de la inversión que incide de manera profunda sobre el funcionamiento de la sociedad, generando enormes desequilibrios y estallidos sociales y la centripetación, es decir, la centralización y la concentración del poder policiaco-militar en la oficina presidencial, capaz de proyectar fuerza de intervención naval y de infantería para restablecer el orden vulnerando por el accionar de una política exterior centrada en la promoción de los intereses cortoplacistas del empresariado estadounidense y de los exportadores, en busca de oportunidades. La proyección de esta presidencia imperial, como adecuadamente la califica Arthur Schlesinger, es restablecer el equilibrio y el orden para propiciar otro ciclo de inversión. Esta dinámica que afecta la relación de Estados Unidos con los países latinoamericanos y caribeños a lo largo del siglo XIX y XX, cobra mayor impulso en la relación bilateral en los tiempos del TLCAN, especialmente por sus impactos sobre el sector rural mexicano. A grandes rasgos, en otra oportunidad⁷ hemos comparado el medio

ambiente internacional contrastante en el que se dio la apertura a la inversión y al comercio durante el porfiriato, con el experimentado durante los gobiernos neoliberales de nuestros días, formalizado en el TLC. Mientras la primera apertura se realizó en función de Estados Unidos en pleno proceso de ascenso hegemónico, el aperturismo del TLC se da en un contexto internacional de crisis hegemónica como resultado, entre otros factores, de la recuperación económico-industrial de los países europeos y asiáticos a lo largo del período posterior a la Segunda Guerra Mundial y que está en la base de la crisis del sistema capitalista que, con grados de creciente agudización, se viene observando desde la década de 1970. Una de las características de ambos períodos ha sido la gran liquidez de la economía internacional y la predisposición latinoamericana de caer en su trampa, en ambos casos abrazando el librecambio y los lineamientos de política económica auspiciados por los centros de poder económico. Como la relación con el exterior observa paralelismos, al "neoporfiriato" habría que agregar su contraparte internacional, el "neomonroísmo". Estados Unidos continúa de manera persistente acaparando y ejerciendo el dominio y la apropiación de la abrumadora mayoría de las transacciones económicas y políticas de México con el mundo, a las que Washington insistentemente ha venido agregando la dimensión de seguridad. Pablo González Casanova ha sintetizado el meollo del asunto así:

7. John Saxe-Fernández, *La compra de México*, en revisión editorial.

... la globalización es un proceso de dominación y apropiación del mundo. La dominación de Estados y mercados, de sociedades y pueblos, se ejerce en términos político-militares, financiero-tecnológicos y socio-culturales. La apropiación de los recursos naturales, la apropiación de las riquezas y la apropiación del excedente producido se realizan -desde la segunda mitad del siglo XX- de una manera especial, en que el desarrollo tecnológico y científico más avanzado se combina con formas muy antiguas, incluso de origen animal, de depredación, reparto y parasitismo, que hoy aparecen como fenómenos de privatización, desnacionalización, deregulación, con transferencias, subsidios, exenciones, concesiones, y su revés, hecho de privaciones, marginaciones, exclusiones, depauperaciones que facilitan procesos macrosociales de explotación de trabajadores y artesanos, hombres y mujeres, niños y niñas. La globalización se entiende de una manera superficial, es decir, engañosa, si no se le vincula a los procesos de dominación y de apropiación⁸.

En contraste, la versión *pop* del globalismo asume y promueve la noción de que la dominación y la apropiación son resultados inevitables de la globalización porque se trata de una ruptura histórica y de un nuevo paradigma tecnológico ante lo que no existe alternativa. Se justifican así las crecientes inequidades, polarización, hiperconcentración de la riqueza y brutal redistribución regresiva del Producto Mundial Bruto a favor de los países capitalistas avanzados, de sus empresas multinacionales y de su enramado de relaciones clientelares con el Tercer Mundo. De paso se oscurece la percepción de que la "globalización" ocurre en el marco de un sistema de relaciones internacionales económicas que opera con los dados cargados a favor de los países capitalistas avanzados (PCA).

El neoliberalismo

No existe fundamentación alguna que sustente la noción tan difundida del globalismo *pop* que afirma haberse constituido en un sistema mundial autorregulado y que, por tanto, la economía escapa a los controles políticos. Que en tal "sistema global" las economías nacionales están subordinadas y son rearticuladas en el sistema por medio de procesos y transacciones; que los mercados y la producción sólo son autoregulados y, en general, que la economía "global", se auto-reglamenta y se autorregulariza, por lo que el Estado nacional y sus mecanismos reguladores son irrelevantes u obsoletos.

Los datos y las estadísticas muestran, que los principales componentes de la economía internacional siguen siendo economías nacionales en las que se profundizan las contradicciones de clase, género y etnia y, además, que lo que se experimenta en la actualidad no representa un hecho sin precedentes, desvinculado de lo que se ha registrado históricamente, en especial a partir de la mencionada segunda revolución industrial de mediados del siglo XIX, a saber: que el comercio y la inversión continúan generando crecientes contradicciones y al mismo tiempo interconexiones de economías que siguen siendo preponderantemente nacionales, tratándose de un proceso que conlleva aumentos en la participación de más y más naciones y actores sociales, políticos, étnicos y económicos, afectados por inequitativas relaciones nacionales e internacionales de dominación de mercado y de inversión. Aumenta el número de economías participantes en las transacciones económicas internacionales, pero esa participación ocurre en el marco de una hiperconcentración de poder económico y de una profunda redistribución regresiva.

La presidencia imperial y la crisis agrícola-campesina

Independientemente de las diferencias interpretativas existe consenso entre una mayoría de analistas sobre la estrecha relación causal entre el esquema económico impuesto por el aparato financiero internacional y los hacendados locales con el estallido de la rebelión chiapaneca el 1 de enero de 1994, la masiva militarización y paramilitarización que se observa en el sistema político mexicano (de manera aguda en varios estados como Guerrero y Oaxaca), junto con graves violaciones de los derechos humanos y políticos. La desestabilización fondomonetarista afecta y debilita de manera profunda los apoyos sociales y políticos del establishment priista. Como bien lo expresa De la Peña:

Aspectos centrales, como el presidencialismo, se deteriora rápidamente por la corrupción, los errores, los agravios, y sobre todo por la apertura de espacios a raíz de las luchas sociales, los cambios capitalistas y las presiones externas. El efecto es que el PRI se vació de contenido, perdió la eficacia instrumental y espacios en el Poder Legislativo y los gobiernos locales, que eran el soporte del presidencialismo, junto con el gasto público y la nómina de la burocracia, que fueron recortados para adelgazar al Estado.⁹

8. Pablo González Casanova, "Los indios de México hacia el nuevo milenio", *La Jornada*, 9 de septiembre de 1998, p. 12.

9. Sergio de la Peña, *op. cit.*

La política económica que se aplicó desde principios de los años ochentas, centrada en una desorbitada desviación de la inversión pública al gasto no productivo como el pago del servicio de la deuda, y una especie de "estado de bienestar al revés", es decir, de subsidio a los sectores de mayores ingresos por la vía de una política fiscal regresiva y de otros dispositivos como los rescates de empresas carreteras y un amplio apoyo al sector financiero-especulativo, está en la base de una profunda desestabilización social y política.

Todas las advertencias sobre los peligros que acarreaban a la estabilidad social y política mexicana los esquemas económicos del binomio FMI-Banco Mundial aplicados por los tecnócratas locales con el entusiasmo y diligencia propios de quienes actúan como *country managers* en un gran esquema de corte colonial, también fueron ignorados por el gobierno demócrata de Clinton. A principios de 1993 el conocido analista estadounidense Walter Russell Mead advertía sobre los retos que enfrentaba EE.UU. en México: el país podía convertirse en un "dolor de cabeza" porque "una década de reformas económicas todavía no producen beneficios políticos o económicos para la mayoría de los mexicanos". Russell Mead notaba que si el TLC fracasaba en llevar el bienestar a las grandes mayorías, "la crisis latente del sistema mexicano se agudizará ... Es casi cierto que el TLC no sea la respuesta a esta profunda crisis de la sociedad mexicana. La inestabilidad real y el conflicto civil en México -ambas posibilidades claras en la próxima década- enfrentará a EE.UU. como una verdadera pesadilla"¹⁰.

La insubordinación de los de abajo

En verdad, el tipo de política económica que desembocó en el TLC, un esquema de integración subordinada que codifica las abismales asimetrías entre nuestra nación latinoamericana y subdesarrollada, con dos de las principales potencias económicas del orbe, es uno

de los principales precipitantes de la desestabilidad que hoy aflige a la nación, desde Chiapas hasta la frontera norte y del Golfo al Pacífico porque generó desempleo y subempleo, polarizó aún más el ingreso y aumentó de manera inusitada y sistemática los niveles de frustración social. Tampoco tuvimos que esperar una década para que la explosividad acumulada en la brutal política económica centrada en el despojo salarial y en la subasta del patrimonio nacional para beneficiar a una mimada plutocracia apátrida adquiriera una expresión militar: pocos meses después de que se publicara el excelente trabajo de Russell Mead estallaba la insurrección chiapaneca mientras la Casa Blanca y sus empleados locales prosiguieron, impertérritos, aplicando los mismos recetarios que han devastado la economía del pueblo mexicano, especialmente de los campesinos, obreros y crecientemente de la clase media y de decenas de miles de pequeños y medianos empresarios.

Es cierto que la rebelión chiapaneca tiene raíces profundas en una historia colonial de violencia, expropiación violenta de la tierra e indignidades sufridas por la población india y que tales daños no fueron subsanados por los gobiernos emanados de la Revolución cuyas prácticas políticas y económicas se orientaron al beneficio de los terratenientes, los ganaderos y todos los grandes intereses dedicados a la explotación forestal o mineral. Una cruda coalición de estos grupos fundada en la explotación política y en las inequidades del caciquismo, con sus "guardias blancas", estaban y están en la base del orden de dominación en Chiapas. Las estructuras agrarias y sociales derivadas de la modernización capitalista sólo beneficiaron a una pequeña minoría y proletarizaron a vastos sectores campesinos no sólo en ese estado sino también a lo largo y ancho del país¹¹.

Datos recabados por el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste indicaban que ya en 1989 64,7% del campesinado chiapaneco eran "jornaleros", 28,4% vivía en la pobreza extrema, y sólo poco más de 6% en situación acomodada. Fue durante los años 60 y 70 cuando, se dio la "jornalerización", periodo en que el campesinado rechazó el uso del conflicto armado para enfrentar sus demandas¹².

10. Walter Russell Mead, "An American Grand Strategy: The Quest for Order in a Disordered World", *World Policy Journal*, vol X. No. 1, Spring 1993, p 33. Buena parte del análisis de Mead sobre asuntos globales asume que existe una base humanista, racional y aun filantrópica en la estructuración de la política exterior de EE.UU. que, en vista de experiencias previas, carece de sustento. Sin embargo, sus juicios más realistas con relación a los peligros objetivos de la proliferación nuclear o de la continuación de las políticas económicas neoliberales en América Latina y el Caribe, son de gran relevancia, como se ha demostrado en Chiapas.

11. Un proceso descrito de manera clara y bien fundamentada por José Luis Calva, *La disputa por la tierra*, México, Fontanara, 1993.

12. Durante los años 80 y 90 el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sur realizó estudios y publicaciones en torno a la jornalerización de los campesinos. Esfuerzos pioneros de Ri-

En el país y específicamente en Chiapas, las condiciones generales de frustración social han estado presentes por largo tiempo, pero los eventos que de manera directa incitan la rebelión chiapaneca están intimamente vinculados con el TLC y los programas económicos auspiciados por EE.UU. por medio del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y concretados gracias al "quintacolumnismo neoliberal" que se asienta en el poder desde el "delamadridato".

Las presiones de la banca mundial

Caben dos aclaraciones: cuando menciono al FMI-BM no hago referencia, de manera estricta, a "instituciones financieras internacionales o multilaterales", como se les califica usualmente, porque estamos en presencia de instrumentos para la proyección de poder de la mencionada centripetación de poder, fielmente descrita en un volumen publicado en 1970 por A. Schlesinger como *Imperial Presidency*. La puntualización es necesaria porque en nuestro medio se ha popularizado el uso de ese término para referirse al presidencialismo mexicano, que en rigor es una autocracia presidencial. Así, la única "presidencia imperial" existente en el Hemisferio Occidental está asentada en la Casa Blanca. Abundan ejemplos de cómo la Casa Blanca utiliza al FMI-BM en operaciones unilaterales e intervencionistas, como lo fue la veda de todo crédito cuando Nixon decidió "desestabilizar" al gobierno de Salvador Allende. En ese entonces el accionar del FMI-BM, BID se "integró" al esquema "golpista" de guerra política, económica y sicológica de la CIA y el Pentágono, articulado por Kissinger.

De igual manera uno se pregunta, ¿qué hacen instituciones presuntamente "multilaterales" o "interamericanas", como el BM, el FMI y el BID en los esquemas unilaterales de "certificación" elaborados por los EE.UU. para la ampliación de facto de su jurisdiccionalidad con la excusa de la guerra contra el narcotráfico? Hechas estas aclaraciones, resulta de inusitada relevancia auscultar tanto los factores endógenos como los efectos social y políticamente desestabilizantes de los programas de ajuste estructural

(PAE) del FMI-BM y de manera particular el impacto de los esquemas de "modernización agraria", en la etiología de la militarización del conflicto chiapaneco, que tiende a generalizarse al resto del país. Tuvo efectos desastrosos sobre la población como un todo, el paquete de "ajustes" que incluye la drástica reducción de la inversión pública, la canalización de recursos gubernamentales y privados hacia el pago de deuda externa y la liberación de precios junto con el control salarial para reducir la inflación y así aumentar la "competitividad internacional" de los productos mexicanos de exportación.

El efecto sobre el empobrecimiento

Los recetarios del FMI-BM propiciaron una declinación profunda en los ingresos reales. Un estudio realizado en 1984 por el Instituto Nacional del Consumidor cuando De la Madrid era presidente y Salinas una figura clave de su gabinete, mostraba que ya un alto porcentaje de familias de bajos ingresos habían renunciado al consumo de carne (11,4%), leche (7,5%), pescado (6,7%) y frutas y vegetales (3,3%). Estudios del BM corroboraban que los salarios reales se habían desplomado a lo largo de los 80 y que la mayor declinación se detectaba precisamente en el sector agrario¹³. Ya en 1989, en México y en la región latinoamericana los efectos negativos de los PAE sobre la economía popular eran abismales y los analistas advertían que "un inmenso grupo, entre 60 y 80% de la población sufre una situación que se acerca a la desesperación observada en el África sub-sahariana o en Bangladesh". La declinación de los ingresos reales no se limitó a las clases más desposeídas sino que empezó a afectar, de manera profunda y acelerada, a los sectores medios¹⁴. A la "jornalerización" del campesinado se agregó la "proletarización" de la clase media mexicana, un proceso que se acentuó de manera desmedida durante el salinato, evocando las advertencias hechas por Crane Brinton en *Anatomy of Revolution* sobre el deterioro de la clase media como tema recurrente en la etiología de la revolución cromwelliana, estadounidense, francesa y rusa¹⁵.

cardo Pozas (*El Chamula, un pueblo indio de los altos de Chiapas*, Instituto Nacional Indigenista, México, 1959) y de Kirsten Albrechsten, Rodolfo Stavenhagen, Robert C. Harman, George A. Collier, Frank Cancian, Evon Z. Vogt y Robert Wasserstrom ofrecieron cimentación empírica sobre los efectos sociales, antropológicos, políticos y económicos de este fenómeno.

13. Consultese Dilmus D. James and James L. Dietz "Trends in Development Theory in Latin America: From Prebisch to the Present, en el volumen editado por estos autores, Boulder Colorado, Lynne Rienner Publishers, 1.990, p. 6.

14. *Ibid*, p. 70.

15. Puntualización de James y Dietz, *ibid*, p. 8.

El desplome de la inversión pública en el sector agropecuario, la irreflexiva contrarreforma agraria salinista al Artículo 27 de la Constitución y la entrada en vigor del TLC se combinaron para actuar como detonantes en un medio muy volatilizado por los efectos acumulativos de frustración socioeconómica de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) del FMI-BM. En el caso de Chiapas la declinación de los salarios reales fue más devastadora debido a la alta proporción de "jornaleros". Cuando el salario mínimo fue considerablemente reducido, se tradujo en un desplome del estándar de vida del campesinado chiapaneco estimado en 64,7%. Con relación a los estándares de vida de 1970, el PAE redujo los salarios reales en cerca de 60%, según puede apreciarse en la tabla 1.

Tabla 1
Evolución de los salarios mínimos
en Chiapas (en pesos viejos).

Año	Salario nominal	Salario real	Índice (1980=100)
1975	46,92	115,70	101,57
1976	70,13	135,97	119,37
1981	165,17	100,00	100,00
1985	1.029,39	69,41	69,41
1990	9.920,00	50,50	50,55
1991	11.115,00	48,14	48,14
1992	11.115,00	42,90	42,90
1993	12.050,00	44,18	44,18

INEGI 1994. Datos recabados por J.L. Calva, *Ibid.*

Los datos¹⁶ indican que las políticas altamente recesivas implantadas desde 1983, el colapso de los precios del café en el mercado internacional y la apertura unilateral del mercado doméstico se expresaron en creciente desempleo y subempleo. Como resultado de estas tendencias, una alta proporción del campesinado chiapaneco sufrió reducciones de 50% de su salario mínimo, o sea, menos de 1,74 dólares diarios. Este fue el caso para 38.8% de la población, y otro 36.6% ganaban entre 1,74 y 3,48 dólares diarios¹⁷.

Así, las políticas económicas de los últimos tres sexenios que están en el corazón mismo del trauma nacional, difícilmente pueden ser concebidas como una "revolución económica pacífica", término usado

por Clinton cuando Carlos Salinas fue objeto de gran reverencia de los medios de comunicación, del gobierno y de las universidades de EE.UU, que le ofrecían mensualmente doctorados honoris causa. La nación padece de una chocante y traumática involución y regresión. Chiapas es un síntoma de una condición generalizada que afecta los fundamentos mismos de la sociedad mexicana porque los principales factores responsables de la rebelión zapatista se encuentran por doquier.

Las respuestas armadas de los inconformes

Carlos Montemayor, conocido estudioso de los movimientos guerrilleros mexicanos y autor de "La guerra del paraíso", analiza algunas de las características antropológicas importantes de la estructura social chiapaneca, indica que el EZLN no es más que la punta del tempano del malestar popular y de la rebelión. Argumenta que ha habido un largo período de incubación que hace que tales movimientos sean muy resistentes a la represión. También son resistentes a acciones impuestas desde fuera de la comunidad¹⁸ y desde luego, no son producto de fuerzas externas, como se ha querido caracterizar a los zapatistas, esto último es un tema rigurosamente estudiado desde una perspectiva antropológica por el especialista Miguel Bartolomé¹⁹.

Las precondiciones de guerra civil, es decir, las "variables independientes" involucradas en el fenómeno, no se restringen a Chiapas, porque la frustración social, económica y de aspiraciones políticas, son características generalizadas del panorama nacional, de tal suerte que los PAE así como las masivas privatizaciones que desembocan en la entrega del patrimonio nacional junto con despidos sumarios y masivos de ferrocarrileros, petroleros y electricistas. El desempleo y subempleo, entre otros, han fungido como principales precipitantes del conflicto social y del notable incremento de la actividad delictiva. Al respecto el concepto de "privación relativa" en su expresión actual, de frustración acumulada, es esencial en cualquier diagnóstico de los orígenes de la rebelión zapatista²⁰. Esto

18. *La Jornada*, 4 de enero de 1994, p. 14.

19. Cf. el excelente libro de Miguel Bartolomé, *Gente de costumbre y gente de razón*, México, Siglo XXI, 1998.

20. Consultese Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel?* Princeton, Princeton University Press, 1970, p. 24. La hipótesis central

16. Las estimaciones son ofrecidas por Calva, *op. cit.*

17. Calva *Ibid.*, p. 30.

quiere decir que no es la pobreza absoluta la responsable de precipitar la guerra interna, sino las percepciones sociales relacionadas con la discrepancia entre las expectativas valorativas de la comunidad y las capacidades valorativas. Las primeras se refieren a los bienes y condiciones de vida a los que la población cree tener derecho mientras que las segundas son los bienes y condiciones sociopolíticas y de bienestar sicológico y cultural que son capaces de obtener y mantener como propios.

La privación relativa, es decir, la brecha entre los bienes y condiciones de vida a los que la población cree tener derecho y lo que realmente obtienen, ha observado una profundización acumulada con la aplicación de programas de ajuste estructural. Es esta discrepancia la principal causa del malestar sicosocial y, en este sentido, la "privación relativa" puede ser mayor en estados como Chihuahua o Coahuila, que registran estándares de vida más altos que los observados en las regiones donde prevalece mayor pobreza absoluta. Sin embargo, las aspiraciones profundamente enraizadas en la conciencia nacional, como las de "tierra y libertad" han incrementado a lo largo y ancho del país la percepción sobre la ilegitimidad del contrarreformismo agrario fondomonetarista aplicado por Salinas al Artículo 27 de la Constitución. A esto es necesario agregar la debilidad objetiva que se deriva de la igualmente generalizada percepción sobre las políticas de distribución regresiva del ingreso, acompañada de un insolente programa de "bienestar social invertido" (*an upside down welfare state*), es decir, dedicado al subsidio, rescate y apoyo de neobanque-

es que el potencial para la violencia colectiva varía -y se relaciona- de manera pronunciada con la intensidad y magnitud de la privación relativa entre los miembros de una colectividad. El énfasis de la hipótesis es la percepción de la privación: el pueblo puede subjetivamente sufrir privación con relación a sus expectativas aunque un observador objetivo no considere que la población sufre de carencias. De manera similar, lo que un observador determine que es la pobreza extrema o "privación absoluta", no necesariamente puede ser considerada como injusta o irremediable por parte de aquellos que la sufren (p. 24). En un trabajo reciente, "Trauma nacional: la punta del iceberg" ilustró algunos de los puntos que relacionan de manera directa la forma en que la política económica y el autoritarismo político prevalecientes en Chiapas y en el resto del país con la privación relativa que está en la base de las precondiciones de guerra interna. Sobre este tema, consultese Harry Eckstein, "Introduction Toward a Theoretical Study of Internal War", en *Internal War*, Glencoe Illinois, The Free Press, 1964.

ros en los que ya nadie confía, o de empresas acostumbradas a los favores oficiales.

El programa para combatir la "pobreza extrema", diseñado por el Banco Mundial y conocido bajo diversos nombres ("Solidaridad", "Procampo", etc.) lejos de aliviar la frustración popular y campesina ha tenido efectos desastrosos. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que ha sido incapaz de contrarrestar los efectos generalizados de la política de topes salariales y de despidos masivos, estos últimos como parte de los compromisos contraídos por el gobierno salinista y el actual con los inversionistas "nacionales y/o extranjeros" interesados en la compra "libre de pasivos laborales" de los ferrocarriles, de la CFE y de las partes en que ya ha sido desmembrada Pemex.

La contracción fondomonetarista de los salarios ha sido tan brutal como irracional. Durante el período 1970-1982, los datos del INEGI indican que los salarios representaron cerca de 37,1% del PNB, mientras que entre 1990 y 1994 descendieron a sólo 25,8%. Utilizando esta información el economista José L. Calva calcula que entre 1983 y 1993 los asalariados mexicanos perdieron el equivalente a 246 mil 900 millones de dólares y que durante los cuatro primeros años del salinato la pérdida fue de 160 mil 900 millones. Con "Solidaridad" sólo se recuperó poco más de 4% de lo perdido por los asalariados²¹.

El neoporfiriato salinista-zedillista

Los analistas clasifican frecuentemente las políticas de desarrollo en dos tipos. El desarrollo que fragmenta, es decir, que concentra la riqueza y polariza la sociedad, y el que integra, es decir, que tiende a promover la equidad económica. La política del FMI-BM aplicada por los tres últimos gobiernos mexicanos es decisivamente del primer tipo. Al concentrar la riqueza en medio del crecimiento inusitado de la pobreza se ha propiciado la violencia social y, en vez de cambiar este rumbo, se acelera el proceso fragmentador por medio de una igualmente inusitada militarización de la acción gubernamental para encarar las consecuencias del programa económico estadounidense. En 1984 el ingreso de 10% de las familias más pobres de México representó 1,72% del PNB y en 1989 después de grandes esfuerzos del delamadridis-

21. Los cálculos se basan en datos del INEGI. Consultese también Juan Castaingst, "Así vamos. Datos: salarios y ganancias", *Excelsior*, 29 de enero de 1994 pp. LF y 5F.

mo se redujo a 1,58% y para 1992 era de 1,55%. En contraste, el ingreso de 10% de familias de mayores ingresos aumentó su participación en el PNB pasando de 32,7% en 1984 a 37,93% en 1989 y a 38,16% en 1992²². Datos obtenidos del Banco de México y de la Bolsa Mexicana de Valores, indican que la concentración de riqueza auspiciada por este "modelo neoporfirista" ha llegado a niveles difíciles de imaginar. En 1994 sólo 0,21% de la población, la crema de una mieda plutocracia, controlaba 51,11% de los activos del país, una cifra que se acrecentó durante la actual administración ya que se dedican a hacer negocios con sus socios de EE.UU, con los pedazos en que fue desintegrada Ferrocarriles Nacionales y, no satisfechos con ello, ahora, "exigen" la privatización total de Pemex y de la CFE²³.

El empobrecimiento de la población se profundizó de manera alarmante, ya que el número de personas dentro de la categoría de pobreza extrema aumentó de 15 millones en 1989 a 26 millones en 1998, es decir, registró un incremento de 73,3%. Como se mencionó, sólo en el período que desembocó en la Revolución de 1910 la sociedad mexicana experimentó algo semejante. En 1989, 16,5% de la población mexicana se encontraba en márgenes de pobreza extrema y ya en 1998 la cifra representa 27% de este núcleo de población respecto de los 95 millones de mexicanos oficialmente registrados, aunque es necesario puntualizar que el número global de mexicanos en la categoría de pobreza es superior a 40 millones. Datos de la Comisión Económica para América Latina y del INEGI²⁴ indican que en la base de este deterioro se encuentra el desplome del gasto social per cápita: los programas para revertir el deterioro social se vieron rebasados y, lejos de progresar en el combate a la pobreza extrema, se presentó un retroceso, ya que el gasto social se mantuvo por debajo de los estándares que permitirían atacar eficientemente el problema²⁵. Así, el fenómeno de la privación relativa se ve considerablemente aumentado

porque, mientras el rezago social se magnifica de manera brutal en el ámbito rural, extendiéndose al urbano, la concentración de la riqueza se incrementa de manera notable en la percepción sobre el favoritismo oficial a favor de una "neo-oligarquía", es decir, un pequeño grupo de empresas y familias privilegiadas, todo ello acompañado de grandes escándalos.

El término "oligarquía" también tiene vigencia. Según L. Thurow el interés de un "establishment capitalista" en ningún momento lleva a sacrificar la integridad nacional ante el altar de las ganancias. Sus integrantes no desatienden el hecho de que su conveniencia mayor está íntimamente vinculada con el buen funcionamiento de la sociedad como un todo, a la que se concibe como una gran embarcación que hay que preservar cuidando los equilibrios socioeconómicos. Una oligarquía que, por el contrario, está dominada por la codicia: el lucro está por encima de la integridad nacional y no muestra mayor preocupación si la nave naufraga. Como destinan gran parte del ahorro nacional bajo su control a las actividades especulativas o a la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales conocidos, en la eventualidad de un hundimiento nacional cuentan con lujosos yates donde refugiarse.

Los procesos de privatización

La privatización y extranjerización del patrimonio del país ofrece a la oligarquía una magnífica oportunidad para realizar jugosas ganancias, que ahora desea ampliar, desde la telefonía, la aviación, la industria azucarera, los ferrocarriles o los bancos hacia Pemex, la CFE, los puertos y los aeropuertos. Las "desincorporaciones", impulsadas por EE.UU. por medio del FMI-BM han tenido un apoyo fundamental en sus "inversionistas institucionales" (fondos mutuales, etc.) y en el gobierno de esta desmemoriada plutocracia. A su favor se realizó la masiva transferencia de 1.200 empresas públicas valoradas en poco más de 24 mil millones de dólares, incluyendo todo el sistema bancario, en vías de extranjerización. Ahora los organismos patronales que los representan, exigen la inmediata privatización de la petroquímica, del gas natural y de la CFE, para "restaurar el equilibrio de las finanzas públicas" ante el desplome de los precios del petróleo. Ciegos ante el hecho de que los montos de los rescates bancarios o carreteros sobrepasen tales desequilibrios, en ningún momento están dispuestos a sacrificarlos ni tampoco dejan saber al público que algunos de los esquemas financieros para lanzar a remate en Wall Street toda la

22. Datos recabados por Calva del Banco de México y Bolsa Mexicana de Valores, *La Jornada*, 14 de febrero de 1994, p. 1.

23. Sobre la concentración del ingreso a nivel nacional, consúltense Elvia Gutiérrez, «Retroceso en la distribución de la riqueza durante la actual administración», *El Financiero*, 11 de febrero de 1994, p. 3.

24. Datos recabados en análisis "Once millones de personas más en la pobreza extrema", *El Financiero*, Año XVII, No. 4835, pp. 1A-3A.

25. *Ibid.*

infraestructura energética del país, han estado circulando por algún tiempo entre sus miembros²⁶.

Es frecuente escuchar y leer a políticos y estudiosos identificados con diversas posturas ideológicas, mencionar que desde la instauración de regímenes neoliberales a principios de los años 80, se abandonó el estado de bienestar. Si se comparan las políticas y condiciones actuales con la situación prevaleciente antes de los regímenes neoliberales, es cierto que se registra inusitado aumento en la generación de millones de nuevos pobres, categoría que incluye a la clase media en decadencia, así como un marcado deterioro en el nivel del gasto social, entre otros factores, pero es necesario reconocer que tanto en México como en toda América Latina es una exageración afirmar que en algún momento hayamos vivido un verdadero "estado de bienestar" de corte keynesiano. Esto se corrobora de cara a los datos comparativos sobre los niveles del presupuesto público -y dentro del mismo, del gasto social- con relación al PNB en Europa o incluso en los mismos Estados Unidos y los respectivos rubros para América Latina.

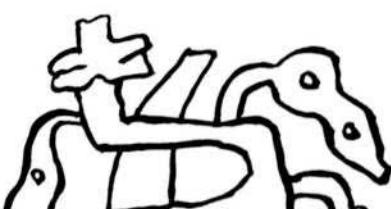
Incluso durante el régimen de Thatcher en Inglaterra el gasto público representó 47% del PNB, del cual 27% se destinó al gasto social y en otros países Europeos como Alemania, Holanda, Francia o Bélgica los porcentajes fueron superiores a 50%.

La crisis fiscal

Aun así, en México el nivel de gasto social anterior a los regímenes de corte "neoporfiriano" fue mayor y no incluyó el masivo y costoso esquema de relaciones públicas que ha caracterizado a los programas diseñados por el Banco Mundial, como Solidaridad o Procampo, dirigidos en realidad a promover los intereses políticos y electorales del partido oficial en las ciuda-

des y en las zonas rurales. El uso patrimonialista de los fondos públicos exacerbó aun más los niveles de frustración política a nivel nacional. En 1980 la inversión pública en el sector social llegó a los tres mil 200 millones de dólares y durante el último año del gobierno de López Portillo se aumentó a tres mil quinientos millones. Pero en 1993 esa cifra se había reducido a mil 960 millones. De 1989 a 1993 los programas regionales de solidaridad en Chiapas llegaron a 527,5 millones de dólares, pero las pérdidas de los asalariados en ese estado, según estimaciones realizadas por Calva, fueron de poco más de tres mil millones de dólares para ese mismo período.

No es accidental que la insurrección chiapaneca coincidiera con la puesta en marcha oficial del Nafta el 1º. de enero de 1994. La vinculación de los dos eventos se relaciona además con varios procesos y acontecimientos, entre los que cabe mencionar los problemas causados por la política de control salarial y la crisis del mercado del café que afectó a cerca de 60 mil pequeños productores en todo Chiapas. La crisis fue el resultado del rechazo de Salinas al Acuerdo Internacional del Café, para cumplir con los requerimientos formalizados en el Apéndice 702.3 del Nafta, en el sentido de que México se comprometió a no actuar en coalición con otros productores para restringir exportaciones y consecuentemente afectar los precios internacionales. La cláusula del café no fue la única razón por la que los indios rechazaron el TLCAN, porque los campesinos ya habían sufrido los efectos de la liberalización comercial en los precios de otros productos como lo fue el colapso de los precios de la carne, soya, sorgo, bananos y cacao, que redujeron aún más el ingreso campesino y desarticularon nacionalmente al sector agrícola de la economía²⁷. Pero el hecho central es que la política económica vigente desvió masivamente el presupuesto nacional hacia el gasto no productivo (pago del servicio de la deuda, rescates bancarios, etc.), y naturalmente la inversión pública global de México observa una declinación de 60,4% entre 1981 y 1992, y las partidas destinadas al sector agropecuario experimentaron una reducción social y políticamente traumática de 79,04% durante ese período.



27. Calva, *Ibid.*

La depresión de la economía campesina

La irreflexiva contrarreforma agraria del Artículo 27 de la Constitución y la caída de casi 80% en la inversión pública en el sector agropecuario en una década, son dos iniciativas diseñadas por el FMI y el Banco Mundial y aplicadas por los gobiernos neoliberales, que actúan como precipitantes de guerra interna al haber generado la mayor crisis observada en la agricultura mexicana desde la Revolución de 1910. Los pequeños productores de todo México enfrentan ahora la competencia de importaciones baratas de granos de EE.UU. como el maíz, mientras el subsidio gubernamental a los precios de los granos -siguiendo lineamientos previamente pactados con el BM-, fueron interrumpidos de manera fulminante. Usando otros parámetros estadísticos para analizar el asunto, mientras la inversión pública en el sector agropecuario en 1982 por la vía de créditos, transferencias fiscales y otras inversiones públicas representaba 2,5% del PNB, ya en 1991 había caído a 0,7%.

Lo que ha venido ocurriendo en la agricultura mexicana desde el salinato fue apropiadamente calificado por un conocido semanario estadounidense como "la revancha de don Porfirio", no sólo por el masivo programa de privatizaciones sino también por lo que, des-

de la perspectiva de muchos observadores externos, aparecía como una contrarreforma agraria de grandes proporciones. Las modificaciones al Artículo 27 implantadas por Salinas y su mayoría legislativa, mismas que fueron previamente pactadas con el FMI-BM, formalmente finalizan la reforma y el reparto agrario, eliminando el concepto de "propiedad social" y dejando a los ejidos y pequeños agricultores a merced de "las fuerzas del mercado". Se trata de un "compromiso" en el FMI-BM que el actual gobierno se inclina a mantener contra viento y marea, incluso arriesgando un conflicto militar de imprevisibles consecuencias, como declaró que E. Rabasa, el comisionado oficial para la paz en Chiapas, al diario español *El País* en torno al *impasse* surgido en la negociación de los Acuerdos de San Andrés, en el sentido de que no se permitiría la "colectivización" de la tierra.

El auge de la economía agroindustrial

Como consecuencia de estas medidas se observa un aumento sustancial de los latifundios y una agresiva ofensiva de los "agribusiness" extranjeros. Los efectos sociales y políticos que han resultado del colapso de la inversión pública en el sector agrícola llevó al BM a diseñar (y al gobierno de Salinas a aplicar) el "Procampo", un programa de emergencia de 3 mil 500 mi-



llones de dólares para enfrentar el predicamento de los campesinos pero que realmente ha operado con la intención de neutralizar los costos electorales de las regresivas políticas implantadas al sector agropecuario. Un documento confidencial preparado por los asesores económicos de la embajada de EE.UU. dice al respecto que dicho programa "nace como un instrumento creado a la luz del TLC para opacar el dolor del campesinado hacia la transición de un mercado abierto ... la transformación económica del campo hacia el sector privado ha tenido consecuencias abruptas y catastróficas para la población rural mexicana que pocas posibilidades tiene de modernizarse para competir en el marco del TLC".

No deja de llamar poderosamente la atención el hecho de que mientras el gobierno de los Estados Unidos y el binomio FMI-Banco Mundial impulsaron, por medio del TLC, el programa salinista de privatización rural con su respectiva contrarreforma al Artículo 27 de la Constitución, en un documento privado dado a conocer por la prensa, los asesores económicos del entonces embajador Jones reconocían que tal política agropecuaria ha contribuido a fomentar la inestabilidad social y por tanto a impulsar el movimiento guerrillero zapatista. Como la privatización agraria ocurrió casi simultáneamente con las elecciones presidenciales, esos mismos analistas puntualizan que "Procampo", el programa de "modernización" agrícola diseñado y financiado por el BM coincidieron con un año electoral, pues el gobierno tiene la obligación de, al menos temporalmente, aliviar los problemas rurales para mantener la ventaja electoral que tradicionalmente ha disfrutado en las áreas rurales.

El documento indica que Estados Unidos "será el mayor beneficiario de la instrumentación de Procampo, pues el giro en los cultivos de las tierras mexicanas favorecerá una mayor importación de maíz y frijol en el corto plazo ... El giro en los cultivos mexicanos hacia otros productos básicos -como trigo, sorgo, soya, arroz y algodón-, hará que para el mediano y largo plazo se dé una mayor demanda de estos bienes sobrepasando la capacidad productiva nacional e incrementando las importaciones de los Estados Unidos". Así, los intereses cortoplacistas de los exportadores de grano de los EE.UU. se anteponen a cualquier consideración relacionada con la explosividad rural y urbana que se genera al calor de los programas de ajuste estructural y de privatizaciones fondomonetaristas. Hay que tomar nota del hecho de que las consecuencias al nivel de "seguridad nacional" que se derivan de una política tiende a lanzar a millo-

nes de campesinos mexicanos hacia las ciudades y hacia los Estados Unidos y están siendo enfrentadas, por el mismo gobierno que la auspicia, por medio de una militarización sin precedentes de la frontera con México.

Como parte de los planes de contingencia estadounidenses para el crítico período de las últimas elecciones presidenciales en México y en anticipación de un creciente malestar de la población rural y urbana sometida por el FMI-BM y sus "country managers" locales a una verdadera guerra económica, el gobierno de Clinton autorizó -y continúa haciéndolo- la transferencia de adiestramiento para la contrainsurgencia rural y urbana y la exportación de equipo militar para proveer a las Fuerzas Armadas Mexicanas (FAM) con mayor fiabilidad y poder de fuego, incrementando su capacidad para el control de huelgas y transfiriendo otras tecnologías para el abatimiento de otras expresiones de descontento rural y urbano.

Según el San Antonio Express News, sólo durante los primeros tres meses después de iniciada la rebelión zapatista, Salinas importó de EE.UU. 3.000 vehículos mientras el Pentágono aprovechó la situación para aumentar su influencia sobre las FAM promoviendo las funciones policiales de contrainsurgencia en el contexto de una estrategia económica que propicia su enfrentamiento con las fuerzas populares.

El neoporfiriato: cogobierno con Estados Unidos

Las políticas de inversión extranjera y de comercio exterior codificadas en el TLC, la desnacionalización y desincorporación de empresas públicas²⁸ y la creciente injerencia externa en asuntos de seguridad no se han derivado de necesidades económicas sino de opciones planteadas ante la cúpula política, alentadas por medio de "préstamos" y "paquetes de rescate", muy condicionados y con gran fuerza persuasiva. Do-

28. El neoporfirismo además de privilegiar a un grupo compacto de beneficiarios, autorizados por el Presidente para enriquecerse, actúa como subastador, a favor del empresariado extranjero, de los bienes nacionales. El Banco Mundial continúa estimulando la socialización de los costos y la privatización de los beneficios, por medio del programa de privatizaciones, que ahora se extiende también al IMSS. El director general del IMSS afirmó recientemente ante el poder legislativo que es un "disparate" asumir que el crédito por 700 millones de dólares que se gestiona ante el Banco Mundial por medio de

cumentos oficiales de la División de Comercio, Finanzas e Industria del BM indican que la apertura comercial unilateral realizada desde 1986 fue el resultado de la fuerte condicionalidad acreedora y de dos cañonazos, *Trade Policy Loans*, de 500 millones de dólares cada uno. A la condicionalidad del FMI -que se refleja más que todo en la dirección macroeconómica-, se añadió el manejo de las ramas económicas y empresas de mayor interés para las grandes firmas de los acreedores, por medio de préstamos atados del BM en campos que van desde la política comercial y la de exportaciones, la minería y la petroquímica hasta programas para la "modernización" de carreteras, puertos, ferrocarriles, aeropuertos, plantas generadoras de electricidad, incluyendo la política municipal, el transporte urbano, la extensión agrícola, el mantenimiento de carreteras, el adiestramiento de mano de obra, la "reestructuración" del sector acerero, del agrícola y del de fertilizantes, la rehabilitación portuaria, la construcción de viviendas, el diseño de programas para promover esa política económica, la asistencia social, el combate a la pobreza extrema, la desregulación financiera, administrativa e industrial, y de transporte de personas y bienes²⁹.

la SHCP está condicionado.

El director general descalificó la veracidad de un documento dado a conocer por la prensa detallando los pormenores del préstamo "porque no es oficial". No creo que en el caso del IMSS el BM, a diferencia de lo que ha venido haciendo desde hace por lo menos quince años, súbitamente se haya transformado en un ente filantrópico. Existen documentos oficiales del BM que indican que gran parte de sus préstamos se orientan a preparar las condiciones para llevar a las empresas o instituciones "favorecidas" a la "modernización", que explícitamente el BM traduce como la privatización a favor de empresas "nacionales y/o extranjeras".

Tanto el Senado como la Cámara de Diputados harían bien en exigir una investigación sobre la larga lista de "préstamos" muy condicionados que se han pactado ya que el aumento en la injerencia sobre la dirección económica de México de instituciones directamente vinculadas con la Casa Blanca, como el FMI-BM y el BID no se restringe al área agropecuaria, por ejemplo, por medio del diseño y financiación del Procampo, sino que se extiende, a lo largo de la experiencia posterior a la negociación de la deuda en 1982, al diseño presupuestal de la Federación impactando de manera directa la orientación estratégica que se va adoptando en grandes empresas y sectores de la economía como Pemex, CFE y Ferrocarriles.

29. Como ocurre hoy con el IMSS, en cuya "modernización" participa el BM con un préstamo de 700 millones de dólares, también en muchas otras áreas y empresas públicas la intención de los préstamos es llevar la empresa o sector a lo que los documentos oficiales del BM denominan "un punto de venta",

Conforme el país desvía de manera irracional la inversión pública hacia el servicio de la deuda o al rescate bancario, a lo largo de los últimos 16 años se fue incrementando de manera proporcional la influencia del FMI-BM sobre las ramas económicas de mayor interés para las empresas de los acreedores. Entre 1982 y 1990 los préstamos sectoriales del BM ascendieron a más de 11 mil 500 millones de dólares y, según se desprende de los informes de su División de Comercio, Finanzas e Industria, esa cifra duplicó y más en lo que va de la presente década. Los préstamos incluyen diversos "tramos" cuya aprobación está condicionada al cumplimiento de metas y calendarios fijados por el BM cuya evaluación, control y vigilancia está a cargo de sus propias misiones técnicas. Virtualmente en todas las secretarías de Estado, direcciones y subdirecciones, empresas públicas y muchas privadas, existe algún tipo de relación directa o indirecta con el BM, ya sea de inspección y supervisión, o de sujeción y minucioso escrutinio.

La intromisión estadounidense

Este tipo de "cogobierno" o "gobierno paralelo", imperceptible a la opinión pública y aparentemente libre del monitoreo legislativo, no se limita a México. Por medio del FMI-BM y el BID, Washington ha establecido un complejo y vasto entramado administrativo que le permite incidir de manera muy directa y detallada sobre la administración pública latinoamericana, tratándose de un esquema cuya dinámica observa paralelismos con las estructuras imperial - coloniales aplicadas por Londres durante el período de apogeo del imperio británico. Los instrumentos de proyección de poder e influencia no se restringen al área de la administración económica,

es decir, a su privatización. La "desregulación" de los sectores estratégicos y de manera especial, de la petroquímica, ha procedido según las indicaciones, calendarios y necesidades empresariales y políticas estratégicas de los Estados Unidos. El programa del BM encaminado a llevar el sector petroquímico a su privatización y extranjerización, dio inicio formalmente en 1986 según el documento "Report and Recommendation to the Executive Directors", del President of the International Bank for Reconstruction and Development, Washington DC., 1989. Este programa se orientó a: 1) limitar el papel de Pemex como el único productor de petroquímicos básicos, por lo cual el BM exigió la adopción de medidas administrativas para modificar tal situación, y 2) que se permita al sector privado la importación de petroquímicos básicos y se promuevan incentivos fiscales.

sino que se extienden también a la política internacional y de seguridad interior.

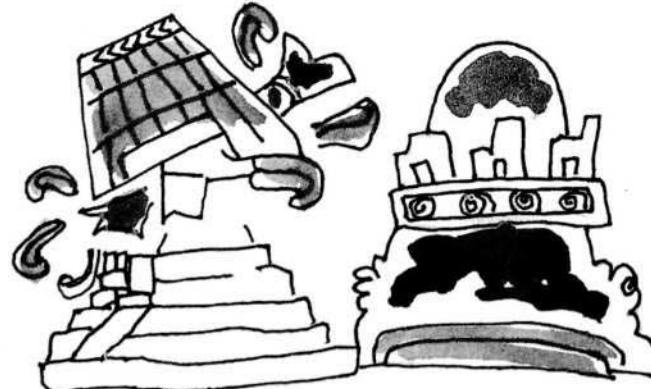
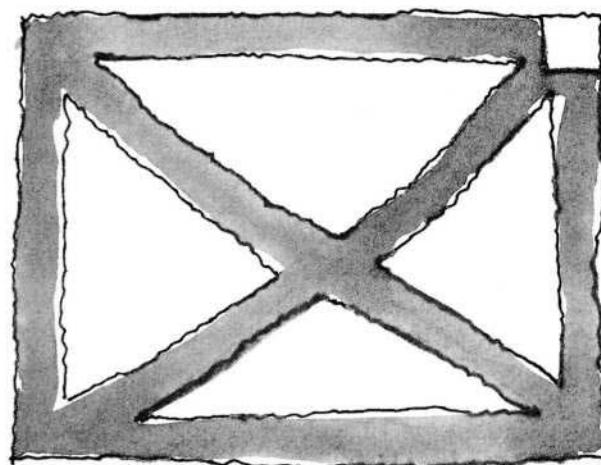
Los instrumentos interamericanos que EE.UU. está forjando tienen como punta de lanza el esquema comercial, de inversión y "político-militar", constituyendo un complejo esquema de relaciones entre la "metrópolis-periferia" de influencias y cruces en las líneas de mando. Una comprensión del fenómeno se logra traduciendo el lenguaje técnico y especialmente las metáforas usadas por el FMI-BM para referirse a los aspectos políticamente más delicados, como, por ejemplo, los problemas de "seguridad" que se derivan del traspaso que se está realizando del manejo, control y usufructo, a favor del empresariado extranjero, preponderantemente estadounidense, de grandes complejos económico-territoriales en México, con la "desincorporación" ferroviaria, eléctrica y del sector petrolero.

En la base de este proceso está la aceptación por parte de los últimos tres gobiernos mexicanos, de los programas de ajuste estructural cuya piedra angular se centra en la transformación de México (y América Latina) en tributarios de EE.UU., convirtiendo al país y a la región en grandes exportadores de capital por medio del servicio de la deuda externa y la fuga de capitales, y la transferencia al empresariado "nacional y/o extranjero" de los principales ejes de acumulación y actividades económicas, un esquema al que estos gobiernos dan prioridad sobre cualquier consideración política, social o incluso constitucional.

Bajo la presión de la crisis de 1982 se aceptaron préstamos del FMI a cambio de aplicar un estricto programa de estabilización y de ajuste estructural del cual Washington derivaría capacidades para influir de manera profunda sobre la dirección económica mexicana y muy particularmente de su orientación favorable hacia la participación de los inversionistas y empresas extranjeras en la adquisición de tierras, bosques, litorales para el desarrollo turístico, minas, y desde luego en áreas de su interés geoestratégico, como la energética y la vinculada con la infraestructura de transporte. Su creciente dependencia de minerales y combustibles fósiles in-

dujo a EE.UU. a mirar a México y sus ricas dotaciones minerales y de combustibles fósiles "con otros ojos" y simultáneamente a poner en marcha instrumentos que le permitieran "remontar" los obstáculos normativos a su acceso y control de recursos constitucionalmente vedados a la inversión privada.

La amplia gama de acuerdos con el FMI y el Banco Mundial que llegaron durante los siguientes quince años, incluyeron una masiva reducción del gasto público, reformas impositivas, restricciones al



crédito, la aceptación de topes salariales, la liberalización comercial y a la inversión y la privatización de las empresas públicas, lo que a su vez se tradujo en una creciente desnacionalización del proceso de toma de decisiones en materia económica y de manera crucial en el diseño presupuestal de la Federación y también –aunque no exclusivamente– de las grandes entidades paraestatales. Durante el primer año del sexenio salinista el FMI logró cumplir con una de sus más importantes metas, por medio del *Extended Facility Agreement* de 1989, al decir de Alejandro Nadal Egea, "todo un acontecimiento histórico" ya que conllevó una profunda "reforma" del sistema financiero na-

cional, es decir, acceder a la "sugerencia" del FMI para la privatización y posterior extranjerización del crédito y el depósito nacionalizados por JLP, incluyendo reducciones a las regulaciones y restricciones a la participación de la inversión extranjera y una mayor liberalización comercial.

El incremento de la deuda externa

El actual proceso de privatizaciones tiene como uno de los mecanismos centrales para su concreción, el tipo de vulnerabilidad financiera gestada a través del mencionado acuerdo. Así, mientras la apertura comercial unilateral auspiciada por medio de los *Trade Policy Loans* del Banco Mundial al gobierno delamadridista se traducía en un abultado déficit comercial junto con una seria afectación de miles de pequeñas y medianas empresas, un fenómeno que continuaría impactando a la economía durante los años 90, el masivo déficit fiscal ocasionado por el desvío de la inversión pública hacia el servicio de la deuda pública –y posteriormente también de costosos programas de rescate del sector financiero privatizado– era perentoriamente subsanado por medio de masivas infusiones de capitales extranjeros preponderantemente de portafolio. La vulnerabilización financiera inducida por el FMI conlleva la casi total desregulación de la inversión extranjera directa y de adquisición de un portafolio financiero en un movimiento de causación circular.

El endeudamiento crónico y la aceptación de un remoldeo acelerado de la deuda, junto con la reducción drástica de los presupuestos, está en la base de la capitulación económica formalizada en el "Memorandum de políticas económicas" de enero de 1995.

Entre junio de 1990 y junio de 1994 entró inversión extranjera calculada en 91.700 millones de dólares, 77% de portafolio, capaz de fugarse en cuestión de milésimas de segundo. La vulnerabilización financiera abrió las puertas de par en par a la inversión extranjera directa y de portafolio. Se desplegó todo un programa intervencionista para sacar del hoyo a los subordinados gobernantes mexicanos a cambio de otro vasto programa de privatizaciones y también para rescatar a las instituciones financieras y mutualistas y a sus varios cientos de miles de ambiciosos inversores estadounidenses dedicados a la especulación y a obtener jugosas ganancias del mercado emergente mexicano, durante el salinato el más prometedor y caliente del Tercer Mundo.

Cabe recordar que la mutación del sistema *Bretton Woods* a principios de los años setentas manifestada en

cambios políticos de clase y de creciente conflictividad inter-capitalista, fue en realidad producto de una severa crisis de acumulación que llevó a la articulación de una verdadera "guerra de conquista" de áreas previamente cerradas a la inversión –como las empresas públicas-. El FMI-BM y BID se dedicaron con especial ahínco a la "creación de condiciones favorables para las privatizaciones". Bajo la presión generada por esta vulnerabilización económica, Washington impuso dos grandes programas de privatización de codiciadas empresas públicas encabezados respectivamente por el delamadridismo y el salinato. Bajo los efectos de la debacle financiera de diciembre de 1994 se instauró una tercera oleada privatizadora que incluyó a las principales empresas públicas de la nación. Zedillo mantiene la apertura indiscriminada al capital especulativo y continúa con el sacrificio del patrimonio nacional y del salario, incrementando los riesgos de más "criminalización rural y urbana" y de estallidos sociales acicateados por los programas de ajuste estructural del FMI, así como los peligros de lanzar de nuevo al país al despeñadero (ya el déficit de cuenta corriente es de 14 mmd) bajo el influjo de los capitales golondrina, como si no hubiera ocurrido nada desde 1982 y existiese en los círculos oficiales una predisposición a no aprender de los grandes traumas: no sólo se persiste sino que se eleva vergüenzosamente el subsidio al monumental fracaso de una banca privatizada, poco profesional, propensa a la especulación irrefrenada y a la corrupción. En este contexto se firma el mencionado "Memorandum de políticas económicas" de enero de 1995, redactado por los asesores del FMI, cuyo inciso 17 sintetiza la capitulación económica en estos términos:

El gobierno de México ha decidido acelerar las reformas estructurales en los sectores de transporte, telecomunicaciones y banca... El presidente ha enviado al Congreso propuestas de enmiendas constitucionales que permitan la inversión privada en ferrocarriles y comunicaciones vía satélite. El gobierno también... promoverá la inversión privada en plantas de generación de energía eléctrica y ha propuesto al Congreso modificaciones legales que permitan una mayor participación extranjera en el sistema bancario de lo considerado bajo el TLC. También se acelerará el proceso iniciado para privatizar otras empresas estatales incluyendo puertos, aeropuertos y plantas petroquímicas³⁰.

Una reflexión final pero preliminar

Karl Marx afirmaba que la historia se repite unas veces como tragedia, otras como comedia. Durante los últimos diez años del siglo XIX y la primera década del XX la olim-

30. SHCP, BM, Memorandum de políticas económicas, DOF, 26 de enero de 1995, p. 149.

garúa porfiriana amasó grandes fortunas que habrían aparecido en la lista dorada Forbes de haber habido una publicación de ese tipo. Ello ocurrió a expensas del salario y de la economía obrera, campesina y eventualmente en los momentos críticos, de la clase media. La crisis bancaria, por altos niveles de cartera vencida gestada al calor de irregularidades en los préstamos concedidos a aliados políticos y especuladores bursátiles e inmobiliarios fue profunda. La debilidad del apoyo sociopolítico del régimen se acentuó. La estructura económica porfiriana fue subordinada, deformada, superespecializada, crecientemente inestable y por tanto muy vulnerable a los factores y cambios de la economía internacional, de tal suerte que cuando el mercado internacional sufrió embates, el sistema bancario porfirista entró en un estado de estupor y colapso. Con la contracción global de 1907 se profundizó la crisis resquebrajándose aún más el sistema de alianzas de Díaz y cuando el autócrata quiso usar la crisis como excusa para posponer el prometido regreso a la democracia, el esquema estalló y el país roto fue llevado a costosos ciclos de guerra civil³¹.

Los paralelismos con la actual situación no pueden ser más elocuentes, la crisis del sistema bancario es profunda tanto como la vulnerabilidad ante los vaivenes de la economía internacional. El efecto combinado y acumulativo de este asalto al patrimonio nacional y la aplicación de los PAE por más de 16 años afectó y debilitó, de manera irreversible, la estructura política. Se acentúan las diferencias regionales, se multiplica la oposición, los antagonismos, se profundiza y extiende la frustración relativa por doquier, y desparrama a lo largo y ancho del país los precipitantes de guerra civil. Se han acentuado las deformaciones económicas, creando estructuras de subordinación política y crecientemente militares del exterior, todas las estructuras son inestables y muy vulnerables a las fuerzas y factores externos, y a la presión de una sociedad agredida que empieza a elaborar respuestas que van desde la formación de nuevos partidos políticos que registran inusitados avances en pocos años como a la creación de diversos grupos y coaliciones de clase media y pequeños y medianos empresarios y propietarios de cara a la agresión continua de la usura bancaria como el Barzón, llegando hasta expresiones novedosas como las que se materializan en el movimiento zapatista. La resistencia

a la depredación y entreguismo desbocados de la cúpula en el poder, debilita de manera profunda la capacidad del neoporfirato para actuar sobre la estructura y la dinámica del sistema social y del aparato productivo para asegurar la operatividad del esquema. Es precisamente desde aquellos afectados por la aplicación de los PAE a la agricultura, (millones de nuestros ciudadanos indígenas, productores y campesinos) de donde surgen los primeros retos político-militares a una oligarquía que no ha dudado en hacer recurso a la violencia despiadada contra la población chiapaneca, como en Acteal³². En México la concentración del poder político en la presidencia se asienta en una amplia coalición de fuerzas sociales, políticas y económicas que incluye a caudillos, caciques locales y regionales, y estructuras corporativas sindicales y políticas como la CTM. Toda esa estructura ha sido debilitada y profundamente socavada por tres sexenios de neoliberalismo que la han fraccionado, rompiendo la disciplina. Hace poco Sergio de la Peña expresó que "... desde el más acá visualizo mejor el México Nuevo", plasmó la síntesis de esa percepción así:

La gran transición actual exige un orden de seguridades y eficacia razonable para hacer vigente la maraña de leyes y normas. No se puede dejar el tránsito a la espontaneidad, en manos de un gobierno, un partido o un grupo de iluminados. Es irreversible la decadencia del sistema de partido único que se inició en los 80. El presidencialismo no asegura el viejo orden. Las oportunidades de corrupción y de abuso se multiplican con la disgregación y refundación de los grupos de poder, como se constató en la gestión salinista... Vivimos el desorden del tránsito de un orden a otro. Hoy se trata de delinear un nuevo acuerdo nacional de convivencia, nuevas reglas del juego social y normas para su cumplimiento, un "metaacuerdo" para evitar que se rompa el país en el intento de transitar a una etapa superior de su existencia. El objetivo es acordar límites y obligaciones para cada sujeto social, previsiones para compensar las ofensas sociales que se infieran, e imponer a todos las disciplinas de una convivencia civilizada. Nos lo merecemos³³.

32. Ante ello la represión siempre ha estado lista y ha sido frecuentemente usada, pero la extranjerización y la participación estadounidense en el esquema represivo coloca a las Fuerzas Armadas mexicanas en una situación difícil que hace aflorar la heterogeneidad de grupos y tendencias existentes. En México la experiencia histórica y territorialmente traumática con Estados Unidos impulsó a las FAM a actuar en defensa de la integridad territorial, la soberanía y la constitucionalización del nacionalismo revolucionario. Ahora se les usa como instrumento de una feroz ofensiva imperialista y oligárquica por lo que las expresiones de descontento se han venido manifestando de diversas formas.

33. *Ibid.*

31. Véase Kaplan, *op cit.*, pp. 133-198. Una comparación de los esquemas de libre mercado decimonónicos con el período actual es ofrecida por Michael Pettis, "The Liquidity Trap: Latin America Free-Market Past", *Foreign Affairs*, November-December 1993, pp. 2-7.